



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO

SAL SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
CONVOCANTE:	MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES Illera85@hotmail.com
CONVOCADO:	NACIÓN-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2017-00983-00

1.-ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra del auto interlocutorio No. 309 del 28 de septiembre de 2017, a través del cual se improbo la conciliación extrajudicial celebrada entre el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** y la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**.

2.-PROVIDENCIA RECURRIDA

A través del auto interlocutorio No. 309 del 28 de septiembre de 2017, se resolvió improbar la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 18 Judicial II para asuntos administrativos de Cali, entre el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** y la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**, tras advertir que la entidad convocada no estaba obligada a pagar la bonificación por compensación reclamada por el convocante, correspondiente al periodo de prueba que desarrolló en la Procuraduría 81 Judicial II Penal de Tuluá, por cuanto dicha contraprestación no se paga por el hecho de posesionarse en el cargo ofertado, sino con ocasión a la participación activa del Agente del Ministerio Público ante las instancias judiciales respectivas.

En dicha providencia se concluyó que, el señor **MIGUEL ANGEL TORES FUERTES** no cumplió con el requisito establecido en el Decreto 1102 de 2012 y en el concurso de méritos, en razón a la inexistencia de Tribunales en el Municipio de Tuluá, por lo que no se podía reconocer el pago del citado emolumento¹.

3.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, al considerar que en la convocatoria 004 de 2015, en ninguna parte aparecía consignado que la sede de ubicación del empleo escogida fuese una simple referencia y que por lo tanto no sería obligatorio tener en cuenta los lugares seleccionados en caso de presentarse las vacancias.

¹ Folio 86 a 90.

También, señaló que no era cierto que el actor tenía que ser nombrado obligatoriamente en la ciudad de Tuluá por ser la única vacante disponible, debido a que la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** mediante oficio No. 005633 del 10 de octubre de 2016, certificó que existían plazas vacantes en otras ciudades donde existe Tribunal Superior, Sala Penal.

Por otro lado, manifestó que al haberse nombrado al señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** en la sede del Municipio de Tuluá, donde no existe Tribunal Superior, se le dió un trato discriminatorio que generó el no pago de la bonificación por compensación. Además, indicó que la citada municipalidad pertenece al Distrito Judicial de Buga, por lo que podía habersele asignado funciones ante el Tribunal Superior de ese distrito.

Adicionalmente, adujo que al accionante al momento de su nombramiento y posesión en el cargo de Procurador Judicial II de Tuluá, nunca se le informó por parte de la accionada que existía la posibilidad de que no le fuese cancelada la bonificación por compensación por el hecho de no existir Tribunal Superior en dicha sede. Así como también, indicó que la misma **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** certificó que a la Procuraduría 81 Judicial II Penal de Tuluá le correspondía la bonificación reclamada.

Por último, manifestó su reparo frente a la providencia recurrida, pues en la misma no se limitó a analizar los aspectos propios de aprobación del acuerdo, sino que se profirió una decisión de fondo propia de una sentencia. En consecuencia, pide que se reponga la decisión inicial y se apruebe el acuerdo conciliatorio².

4.-PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Lo primero que debe señalarse es que conforme el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que imprueba una conciliación prejudicial, no es susceptible de apelación; por lo tanto, es claro que no procede tal recurso contra el auto interlocutorio aquí objetado.

En tal sentido, se procederá a resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto.

La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero, neutral y calificado, denominado conciliador. Ésta es posible siempre que las pretensiones versen sobre asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, pudiendo a través de ella terminar de manera anticipada un proceso en curso -conciliación judicial-, o precaver uno eventual -conciliación extrajudicial- mediante un acuerdo que, debidamente aprobado por la autoridad judicial, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo³.

Según dispone el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, las personas jurídicas de derecho público a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de carácter

² Folio 94 a 97.

³ Ley 640 de 2001 y Decreto 1069 de 2015

particular y contenido económico de que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo con ocasión de las acciones de que hablaban los artículos 85, 86 y 87 del Decreto 01 de 1984, hoy artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437 de 2011.

Por vía de jurisprudencia⁴ y atendiendo lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 23 de 1991, con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, se ha determinado algunos requisitos para poder aprobar una conciliación prejudicial, siendo estos:

- La acción no debe estar caducada.
- El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.
- Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes tener capacidad para conciliar.
- El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público.

Conforme a las disposiciones anteriores, entraremos a analizar el caso concreto, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos indicados, como quiera que el hecho de no haberse abordado en la decisión inicial cada uno de estos puntos, constituye uno de los argumentos de la reposición:

4.1. Que no haya operado la caducidad de la acción

De acuerdo con el literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe instaurarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que el cómputo del término para la presentación oportuna de la actual acción debe contarse a partir del 15 de diciembre de 2016, día siguiente a la de emisión el acto acusado⁵. Por tanto, como la solicitud de conciliación fue presentada el 7 de abril de 2017⁶, es evidente que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la Ley.

4.2. El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes

Sobre los asuntos susceptibles de conciliación, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia, indicando que la situación debe ser evaluada para cada caso en concreto, sentido que fue acogido por la Corte Constitucional así:

"En efecto, por regla general, son materia de conciliación aquellos derechos transables que tengan el carácter de "inciertos y discutibles". Empero, la posición de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en cuanto a la exigibilidad del requisito de la conciliación prejudicial, es que cada caso concreto debe ser analizado atendiendo la calidad de los derechos reclamados (naturaleza

⁴ Consejo de Estado, sentencia proferida el 13 de octubre de 2011, Consejera Ponente **MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**, radicación: 25000-23-24-000-2010-00319-01

⁵ Folio 3 a 5.

⁶ Folio 79.

económica y cuantificable) y la posibilidad de su debate en el escenario conciliatorio.

Puntualmente, mediante sentencia de unificación 11001031500020090132801 del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de la referida Corporación, unificó la jurisprudencia contradictoria de algunas de sus salas en relación con la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el sentido de que “estando de por medio derechos de carácter laboral, que algunos tienen la condición de irrenunciables e indiscutibles y otros de inciertos y discutibles, en cada caso en particular debe analizarse el publicitado requisito de procedibilidad, pues el mismo no siempre resulta obligatorio”.⁷

Ahora bien, en asuntos de carácter laboral, el artículo 53 de la Constitución Política otorga la facultad para conciliar o transigir expresamente sobre derechos inciertos y discutibles. En efecto, por intermedio de la citada cláusula constitucional, el constituyente de 1991 le atribuyó al Congreso de la República el deber de expedir el estatuto del trabajo teniendo en cuenta, entre otros aspectos, unos principios mínimos fundamentales de carácter laboral, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos contenidos en las normas laborales y las facultades para conciliar y transigir sobre derechos inciertos y discutibles.

De manera que, el operador judicial de lo contencioso administrativo, con relación a los asuntos susceptibles de conciliación en materia laboral ante esta jurisdicción, y que se discuten a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como garantía de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, debe analizar en rigor si se está ante derechos inciertos y discutibles o no, puesto que de estar ante derechos ciertos e indiscutibles, no es viable exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, toda vez que tales derechos no pueden ser objeto de conciliación.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha considerado jurisprudencialmente que, cuando se trata de litigios de carácter laboral, por regla general se está ante derechos irrenunciables de los trabajadores, resultando en tal sentido improcedente exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Así se ha pronunciado la Alta Corporación⁸:

“De este modo, la regla general en materia laboral es que los derechos relacionados con el trabajo humano -incluidos los derechos pensionales- son irrenunciables, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario. La irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales y de la seguridad social, fue avalada a canon constitucional a través del artículo 53 de la Constitución Política de 1991, que si bien impone una actuación positiva por parte del Congreso de la República al expedir el estatuto del trabajo, no es óbice para que la administración se sustraiga de su contenido en sus actuaciones frente a los administrados.”

En el presente asunto, la parte actora reclama el reconocimiento de la bonificación por compensación correspondiente al periodo de prueba que desarrolló en el cargo de Procurador 81 Judicial II Penal del Municipio de Tuluá, emolumento salarial que se tiene dispuesto por disposición legal a favor de quienes ejercen la representación del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal; de manera que se trata de un derecho de carácter laboral de

⁷ Sentencia T-023 de 2012

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 8 de marzo de 2010, Consejero Ponente: Dr. **LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO**, radicado: 25000-23-15-000-2009-01920-01.

naturaleza irrenunciable, que en el caso objeto de estudio, se encuentra en discusión.

No obstante lo anterior, revisado el acuerdo conciliatorio, se observa que en el mismo se reconoce de manera integral dicha bonificación por los meses reclamados a favor del señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES**, y se otorga además la indexación de las sumas reconocidas; cediendo la parte accionante frente al pago de intereses, concepto frente al cual ésta puede disponer.

Así las cosas, se concluye que el presente, es un litigio que envuelve una pretensión de contenido económico.

4.3. Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes tener capacidad para conciliar

En el caso concreto, se advierte que la solicitud de conciliación⁹ fue presentada por el doctor **JORGE ANDRES ILLERA CAJIAO**, quien ejerce la representación judicial del señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** y cuenta con la facultad para conciliar¹⁰.

Mientras que el acuerdo conciliatorio¹¹ fue suscrito por la doctora **KATHERINE GARCIA MICOLTA**, a quien le fue otorgado poder de representación por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, con facultad expresa para conciliar¹².

4.4. El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público

En el *sub examine*, de acuerdo con el material probatorio aportado, se tiene por acreditado que, el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** se hizo partícipe de la convocatoria No. 004 de 2015 de la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**, en la que se estableció el concurso de méritos para proveer los cargos de Procuradores Judiciales, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015¹³.

De conformidad con el formato de inscripción del actor, éste se inscribió en el cargo de Procurador Judicial II, y como dependencia escogió la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, y como sede territorial de ubicación del empleo de preferencia, marcó la ciudad de Cali, y alternas las ciudades de Pasto Popayán y Pereira¹⁴.

Los elementos de prueba también dan cuenta que, la lista de elegibles del mencionado concurso, se estableció a través de la Resolución No. 357¹⁵ del 11 de julio de 2016, dentro de la cual quedó incluido el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** en el puesto 131, luego de superar las pruebas previstas en la convocatoria. A su vez, se tiene por demostrado que por medio del Decreto No. 3777¹⁶ del 08 de agosto de 2016, el prenombrado con posterioridad, fue

⁹ Folio 41 a 56.

¹⁰ Folio 01 a 02.

¹¹ Folio 79 a 82

¹² Folio 70.

¹³ Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad

¹⁴ Folio 14.

¹⁵ Folio 15 a 20.

¹⁶ Folio 22 a 23.

nombrado en periodo de prueba, por el término de 4 meses en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC en la Procuraduría 81 Judicial II Penal, con sede en la ciudad de Tuluá-Valle.

Ahora bien, después de su nombramiento y de tomar posesión del cargo, el actor formuló petición ante la entidad convocada, solicitando el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, la cual no le había sido cancelada, a pesar de que dicho emolumento estaba previsto como factor salarial para dicho empleo, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria. No obstante, la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** por medio del oficio No. S.G. 007447 del 14 de diciembre de 2016¹⁷, negó tal reconocimiento, al considerar que la bonificación no se causaba a favor de los Procuradores Judiciales II por el sólo hecho de su nombramiento y posesión, sino que se sujetaba a la intervención permanente ante Magistrados de Tribunal; precisando además que dicha regla había sido puesta en conocimiento de los participantes de la convocatoria No. 004-2015.

Las circunstancias así descritas, llevaron al señor **TORRES FUERTES** a la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, en procura de obtener el pago de la bonificación por compensación reclamada, pretensión frente a la cual la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** presentó formula de arreglo, que fue aceptada por la parte convocante y que hoy es objeto de estudio.

A través de auto interlocutorio No. 309 del 28 de septiembre de 2017, esta Corporación decidió improbar el acuerdo conciliatorio, tras advertirse que no se cumplieron los presupuestos legales que permitieran dar viabilidad al mismo; concretamente, se concluyó que no había lugar a disponer el pago del emolumento solicitado, como quiera que el actor no había desarrollado actividades de representación del **MINISTERIO PÚBLICO** ante Tribunales, ante la inexistencia de dichas corporaciones en el Municipio de Tuluá.

Frente a dicha decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de reposición, manifestando que no compartía el argumento esbozado en la providencia recurrida, en torno a que la designación del señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** debía efectuarse en la sede del Municipio de Tuluá por ser la única vacante disponible, pues de acuerdo con el oficio No. 005633 del 10 de octubre de 2016, la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** certificó la existencia de plazas vacantes en otras ciudades; por lo que estima que no había razón para que su representado fuera nombrado en la citada localidad.

Al respecto, debe decirse, en primer lugar que, la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015, por medio de la cual se reglamentó la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de Procuradores Judiciales, en el parágrafo del artículo 20 claramente estableció que *"la sede territorial de ubicación del empleo escogida dentro de la convocatoria seleccionada por el aspirante en la fase de inscripción es una referencia a sus preferencias. No obstante, se integrará una sola lista por cada convocatoria y la provisión se realizará entre los distintos despachos y ciudades que la integran, en estricto orden de mérito"*.

Del precepto en cita, resulta evidente que la ubicación geográfica escogida por el participante en la inscripción al concurso, denota el lugar en el que

¹⁷ Folios 3 a 5.

preferiblemente quisiera que se efectuara su designación en el cargo; sin embargo, la norma diáfana establece que la provisión de los empleos se hará entre los diferentes despachos y ciudades ofertados, de acuerdo al puntaje obtenido al finalizar el concurso de méritos.

Revisado el acto de nombramiento del señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** (Decreto 3777 del 08 de agosto de 2016), se observa que en éste se consignó que las sedes territoriales seleccionadas por el prenombrado en su inscripción, se encontraban provistas en periodo de prueba o propiedad; por lo que su designación se haría en el Municipio de Tuluá, donde se encontraba la vacante.

Ahora, la parte actora aduce que no es cierto que esa sede fuese la única vacante, dado que en el oficio No. 005633 del 10 de octubre de 2016¹⁸, la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** enlista las plazas que no fueron aceptadas; no obstante, obsérvese que dicho acto es posterior al nombramiento del actor, por lo que la información allí plasmada no acredita que para el momento de la designación del señor **TORRES FUERTES** estuvieran disponibles las sedes del Ministerio Público allí relacionadas, y en ese sentido no puede aceptarse el planteamiento de la parte recurrente, pues como quedo visto el nombramiento se dio en una de las plazas ofertadas, la cual se encontraba vacante para ese momento.

De otro lado, el accionante aduce que al habersele nombrado en la sede del Municipio de Tuluá, donde no existe Tribunal Superior, se le dió un trato discriminatorio que generó el no pago de la bonificación por compensación, y que además, nunca fue informado por parte de la accionada que existía la posibilidad de que no le fuese cancelada el citado emolumento por el hecho de no existir Tribunal Superior en dicha sede.

En relación con este punto, encuentra la Sala que en la convocatoria No. 004-2015, en cuanto a la identificación del empleo denominado Procurador Judicial II, Código y Grado 3PJ-EC, nivel jerárquico Profesional, se describieron los valores que percibiría por concepto de asignación básica, gastos de representación, prima especial de servicios y bonificación por compensación, precisándose en torno a éste último factor, que estaría sujeto a la intervención permanente que se realizara ante las autoridades judiciales respectivas.

Y de conformidad con el Decreto 1102 de 2012, *“por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”*, dicho emolumento está previsto en particular, para los funcionarios vinculados a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal.

En el caso *sub examine*, de acuerdo con el acto administrativo por medio del cual se efectuó la distribución de la carga laboral de los Procuradores Judiciales I y II Penales del Departamento del Valle del Cauca, a la dependencia en la que fue designado el señor **TORRES FUERTES** (Procuraduría 81 Judicial II Penal de Tuluá), le fue asignada la representación del **MINISTERIO PÚBLICO** ante Juzgados Penales del Circuito, Juzgados de Instrucción Penal Militar y Fiscalías Seccionales y Especializadas; por lo que entonces, ha de tenerse por probado que el actor no ejerció funciones, ni intervino como Agente del órgano de control ante

¹⁸ Folio 30 a 32.

Tribunales, condición ésta a la que se sujetaba el reconocimiento y pago de la bonificación reclamada.

Ahora bien, el actor aduce que su designación en la sede del Municipio de Tuluá implicó que se le diera un trato discriminatorio frente a los demás participantes, pues no fue informado que tal nombramiento podía generar el no pago del emolumento en mención, por no existir Tribunales en dicha localidad; sin embargo, a juicio de la Sala, la convocatoria que fijó las reglas del proceso de selección, tal como se advirtió en precedencia, claramente estableció la condición para el pago de la bonificación por compensación a favor de quienes desempeñaran el cargo de Procurador Judicial II, esto es, el ejercicio o desarrollo de actividades de representación del **MINISTERIO PÚBLICO** ante los Magistrados de Tribunal.

Recuérdese que, la convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración, son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe.

Así las cosas, resulta evidente que el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** era conocedor de las exigencias y condicionamientos que se previeron para el cargo seleccionado; así como de los conceptos que integraban la asignación salarial correspondiente a ese empleo; por lo que no puede predicarse que existió un trato desigual.

como argumentos adicionales el recurrente señala de un lado, que la misma **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** certificó que a la Procuraduría 81 Judicial II Penal de Tuluá le correspondía la bonificación reclamada y de otro, que por pertenecer el Municipio de Tuluá al Distrito Judicial de Buga, podía habersele asignado funciones ante el Tribunal de esa municipalidad.

Frente a dichos planteamientos, ha de decirse que con el escrito de la solicitud de conciliación se aportó una constancia expedida por la División de Gestión Humana de la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** el día 13 de septiembre de 2016¹⁹, en la que se certifica que el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** en su calidad de Procurador 81 Judicial Penal de Tuluá, devenga como factores salariales: asignación básica, gastos de representación, prima especial de servicios y bonificación por compensación. Lo anterior, a juicio de la Sala se torna contradictorio frente a lo pretendido con el trámite conciliatorio, pues según dicha prueba, el emolumento que el actor reclama era reconocido como parte integral de su remuneración; y en tal sentido, la reclamación efectuada en sede extrajudicial no tendría fundamento alguno, y el acuerdo formulado por la convocada resultaría lesivo para el patrimonio público, por hacerse un doble reconocimiento.

En cuanto a la distribución de funciones, basta con indicar que no puede pretender el actor endilgar responsabilidad a la convocada por no haberle asignado funciones ante una sede que contara con Tribunal Superior, pues frente al acto que efectuó tal distribución de la carga laboral de los Procuradores Judiciales del Departamento del Valle del Cauca, éste guardó silencio.

¹⁹ Folio 33.

En consecuencia, encuentra la Sala que el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes resulta violatorio de la Ley y lesivo para el patrimonio público, y por tanto, no resultaba procedente impartirle aprobación, pues el convocante no cumplió los requisitos exigidos para ser beneficiario de la bonificación por compensación reclamada, conforme se explicó previamente.

Finalmente, advierte la Sala que con posterioridad a la interposición de los recursos, se aportó una providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se resolvió de manera favorable un asunto similar al que aquí se estudia, en el que se solicitaba el reconocimiento de la bonificación por compensación por parte de quien había sido designada Procuradora Judicial II en el Municipio de Cartago, por lo que se pide que se tenga en cuenta dentro del presente trámite.

Al respecto, debe indicarse que el precedente se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues lo que busca es asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles; además, constituye una herramienta de protección de la confianza legítima y la buena fe, en la medida en que proscribe el uso y la interpretación caprichosa de los elementos jurídicos aplicables por las autoridades judiciales al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción²⁰.

Existen dos clases de precedente: el horizontal y el vertical. El primero comprende aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, mientras que el segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores²¹, advirtiendo eso sí, que los tribunales no son órganos de cierre y, por ende, carecen de la función de unificar jurisprudencia.

Partiendo de los lineamientos expuestos, es claro que la decisión aportada no constituye un precedente que ate a esta Sala de decisión, por no tratarse de una providencia de unificación, ni haberse proferido por una instancia judicial superior; por lo tanto, no obliga a que el presente asunto se resuelva en los mismos términos allí dispuestos.

En virtud de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto interlocutorio No. 309 de 28 de septiembre de 2017, a través del cual se resolvió improbar el acuerdo conciliatorio al que

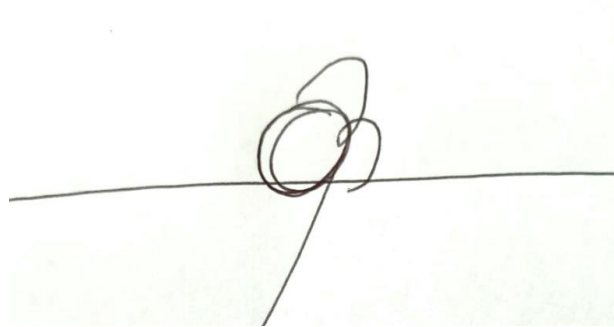
²⁰ Sentencia T-438 de 2016.

²¹ Sentencia SU-113 de 2018.

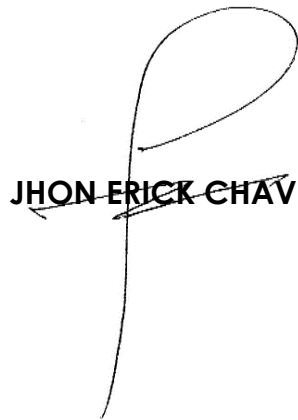
llegaron el señor **MIGUEL ANGEL TORRES FUERTES** y la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**, conforme se indicó en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto a las partes, al correo electrónico suministrado por éstas.

Notifíquese y cúmplase,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a horizontal line with a large, stylized loop above it and a vertical line extending downwards from the center of the loop.

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'J' shape with a horizontal line crossing it near the middle.

JHON ERICK CHAVES BRAVO

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'F' shape with a horizontal line crossing it near the middle, and a large, stylized 'G' shape to the right.

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Magistrado